

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



**JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ D.C.**

ACCIÓN DE TUTELA

RADICADO: 11001-41-05-008-2023-00759-00

ACCIONANTE: OSCAR GERARDO VELÁSQUEZ ARIAS

ACCIONADA: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ

SENTENCIA

En Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes septiembre del año dos mil veintitrés (2023), procede este Despacho Judicial a resolver la acción de tutela interpuesta por **OSCAR GERARDO VELÁSQUEZ ARIAS**, quien solicita el amparo del derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por la **SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ**.

RESEÑA FACTICA

Manifiesta el accionante, que el 14 de abril de 2023 radicó un derecho de petición ante la accionada, con el fin de que se actualizara en el sistema de recaudo el pago del impuesto de su vehículo de placas BCD-560.

Que a la fecha no ha recibido respuesta a su petición.

Por lo anterior, solicita se ampare su derecho fundamental y, en consecuencia, se ordene a la accionada dar una respuesta de fondo a la petición realizada el 14 de abril de 2023.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ:

La accionada allegó contestación el 21 de septiembre de 2023, en la que manifiesta que mediante oficio No. 2023EE35932801 del 19 de septiembre de 2023, dio respuesta a la petición del accionante.

Por lo anterior, solicita se declare improcedente la acción de tutela por configurarse carencia actual de objeto por hecho superado.

CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO:

¿La **SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ** vulneró el derecho fundamental de petición del señor **OSCAR GERARDO VELÁSQUEZ ARIAS**, al no haberle dado respuesta a su petición del 14 de abril de 2023?

MARCO NORMATIVO

Conforme el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un instrumento judicial de carácter constitucional, subsidiario, residual y autónomo, dirigido a facilitar y permitir el control de los actos u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares cuando estos vulneren derechos fundamentales.

Esta acción constitucional puede ser interpuesta por cualquier persona, a fin de obtener la pronta y efectiva defensa de los derechos fundamentales cuando ello resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable, o cuando no exista otro medio de defensa judicial.

DERECHO DE PETICIÓN

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. En desarrollo del Texto Superior, fue expedida la Ley 1755 de 2015 *“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”*, una norma de carácter estatutario, que establece la regulación integral de este derecho fundamental.

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha referido al derecho de petición, precisando que su contenido esencial comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibir las o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos

establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas¹.

Conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el ejercicio del derecho de petición en Colombia está regido por las siguientes reglas y elementos de aplicación²:

“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.

*3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser **oportuna**, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe **resolver de fondo** el asunto solicitado. Además de ello, debe ser **clara, precisa y congruente** con lo solicitado; y (iii) debe **ser puesta en conocimiento** del peticionario.*

4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.

5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.

6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiese darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.

7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.

8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder.

9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado”.

Así entonces, la efectividad y el respeto por el derecho de petición, se encuentran subordinados a que la autoridad requerida, o el particular según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y con una notificación eficaz.

1 Sentencia T-251 de 2008. Citada en las Sentencias T-487 de 2017 y T-077 de 2018.

2 Sentencias T-296 de 1997, T-150 de 1998, SU-166 de 1999, T- 219 de 2001, T-249 de 2001 T-1009 de 2001, T-1160 A de 2001, T-1089 de 2001, SU-975 de 2003, T-455 de 2014.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho de petición supone un resultado que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de la petición. Sin embargo, se debe aclarar, que el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa³.

En síntesis, la garantía real del derecho de petición radica en cabeza de la administración o del particular una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo esencial. La obligación no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que esté dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información.

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela, en principio, *“pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”*⁴. En dichas situaciones, la acción de tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz⁵.

En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y *“previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”*⁶. Así pues, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.

En ese orden, la Corte Constitucional ha desarrollado la teoría de la carencia actual de objeto como una alternativa para que los pronunciamientos no se tornen inocuos, y ha

³ Sentencia T-146 de 2012.

⁴ Sentencia T-970 de 2014.

⁵ Sentencias T-588A de 2014, T-653 de 2013, T-856 de 2012, T-905 de 2011, T-622 de 2010, T-634 de 2009, T-449 de 2008, T-267 de 2008, T-167 de 2008, T-856 de 2007 y T-253 de 2004.

⁶ Sentencia T-168 de 2008.

aclarado que el fenómeno se produce cuando ocurren dos situaciones específicas: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado.

Con relación a la categoría de carencia actual de objeto por hecho superado, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 lo reglamenta en los siguientes términos: *“Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”*.

La Corte Constitucional ha interpretado la disposición precitada en el sentido de que la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando desaparece la afectación al derecho fundamental invocado⁷. En efecto, si la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, cuando la perturbación que dio origen a la acción desaparece o es superada, el peticionario carece de interés jurídico ya que dejan de existir el sentido y objeto del amparo.

Luego, al desaparecer el hecho que presuntamente amenaza o vulnera los derechos de un ciudadano, carece de sentido que el juez profiera órdenes que no conducen a la protección de los derechos de las personas. Así, cuando el hecho vulnerador desaparece se extingue el objeto actual del pronunciamiento, haciendo inocuo un fallo de fondo⁸.

En sí, el hecho superado se refiere a la observancia de las pretensiones del actor a partir de una conducta desplegada por el transgresor. En otras palabras, se entiende hecho superado cuando por medio de la omisión o acción reprochada por el accionante, ya fue superada por parte del accionado.

Cuando dicha situación tiene lugar, la obligación del juez de tutela no es la de pronunciarse de fondo, solo cuando estime necesario *“hacer observaciones sobre los hechos que originaron la acción de tutela, con el propósito de resaltar su falta de conformidad constitucional, condenar su ocurrencia y conminar a que se adopten las medidas necesarias para evitar su repetición, so pena de las sanciones pertinentes”*⁹. De cualquier modo, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que en la sentencia se demuestre la reparación del derecho antes de la aprobación del fallo, es decir, que se demuestre el hecho superado¹⁰¹¹.

⁷ Sentencias T-267 de 2008, T-576 de 2008, T-091 de 2009, T-927 de 2013, T-098 de 2016, T-378 de 2016 y T-218 de 2017.

⁸ Sentencia T-070 de 2018.

⁹ Sentencia T-890 de 2013.

¹⁰ Sentencias SU-225 de 2013, T-856 de 2012, T-035 de 2011, T-1027 de 2010, T-170 de 2009 y T-515 de 2007.

¹¹ Sentencia T-970 de 2014.

CASO CONCRETO

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y la documentación allegada, observa el Despacho que el señor **OSCAR GERARDO VELÁSQUEZ ARIAS** elevó un derecho de petición ante la **SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ**, en el que solicitó lo siguiente¹²:

“De manera atenta y respetuosa me dirijo a su despacho, con el fin de elevar el reclamo, debido a que el día 24/03/2023, realicé el pago del impuesto del año del 2022, de mi vehículo de placas BCD560, marca Mitsubishi del año 2022 por un valor de 167.000 mil pesos M/C, por medio de pagos en línea del Banco Davivienda número de recaudo 23034450693, aprobación 1986343376, donde ya han pasado 22 días y no ha sido borrado del sistema, donde no he podido realizar el traspaso del vehículo porque aparece que debe el impuesto del 2022, por lo anterior solicito su colaboración y sea descargado del sistema, agradezco su atención prestada.”

La petición fue enviada el 14 de abril de 2023, a la dirección electrónica: radicación_virtual@shd.gov.co¹³.

La **SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ**, al contestar la acción de tutela manifestó que, mediante oficio 2023EE35932801 del 19 de septiembre de 2023, dio respuesta a la petición del accionante. En sustento, aportó una copia de la respuesta que brindó al accionante en los siguientes términos¹⁴:

“Una vez consultados los Sistemas de Información Tributaria de la secretaria de Hacienda Distrital, el Estado de Cuenta Detallado, el reporte de declaraciones, facturas y la relación de pagos del Impuesto sobre vehículos Automotores del rodante con la placa BCD560, observa que el pago de la obligación tributaria para la vigencia 2023, se encuentra incorporado y aplicado, tal como se observa a continuación:

Vigencia	CHIP/ PLACA	Preimpreso y/o referencia	Fecha de presentación y/o pago	Impuesto a cargo	Dcto pronto pago	Aporte voluntario	Derechos de semaforización	Total pagado
2023	BCD560	23034450693	24/03/2023	90.000	-9.000	9.000	77.000	167.000

Igualmente informar que, de acuerdo al Sistemas de Información Tributaria de la Secretaria de Hacienda Distrital, el Estado de Cuenta Detallado, el reporte de declaraciones, facturas y la relación de pagos del Impuesto sobre vehículos Automotores de la vigencia 2023 para el mismo rodante, registra un doble pago por de \$158.000 mcte.

Por lo anterior, en cuanto al doble pago por la vigencia 2023 del Impuesto sobre vehículos Automotores del rodante en cuestión, es necesario que efectúe la solicitud de manera formal como trámite especial de Devolución y/o Compensación en los puntos dispuestos por la Administración para la recepción de dicho trámite; adjuntando la documentación requerida para el lleno de los requisitos (Artículo 9º del Decreto Distrital 499 del 22 de agosto de 1994).

(...)

¹² Página 05 del archivo pdf 01AcciónTutela

¹³ Página 05 ibídem

¹⁴ Páginas 8 a10 del archivo pdf 05ContestacionSecretariaHacienda

Cabe aclarar que solo procede la Devolución y/o Compensación para quien figura como contribuyente en los documentos tributarios que originan el posible saldo a favor, y es a nombre de ellos que se debe radicar la solicitud.

(...)

Por lo cual, una vez cumpla con todos los requisitos antes citados, le invitamos a realizar su nueva radicación de solicitud de devolución y/o compensación a través de los siguientes canales de atención:

(...)

Es importante señalar que de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 del Acuerdo 469 de 2011 y al Artículo 855 del Estatuto tributario, el término para efectuar la Devolución y/o Compensación es de cincuenta (50) días siguientes a la fecha de radicación de la solicitud de devolución, presentada oportunamente y en debida forma.

Por último, revisado los Sistemas de Información Tributaria de la Secretaria de Hacienda Distrital, el Estado de Cuenta Detallado para la vigencia 2022 aún persisten saldos insolutos pendientes por cancelar, las cuales son deudas claras, expresas y actualmente exigibles para la Administración Tributaria Distrital y que a continuación se relaciona sin tener en cuenta los intereses de mora actualizados:

<i>Vigencia</i>	<i>CHIP/PLACA</i>	<i>Impuesto a cargo</i>
<i>2022</i>	<i>BCD560</i>	<i>79.000</i>

Se invita al contribuyente ponerse al día con el pago a través de la Oficina virtual, con su usuario y contraseña <https://oficinavirtual.shd.gov.co/OficinaVirtual/login.html> y llevar a cabo el (los) trámite(s) respectivo(s), generando el (los) recibo(s) de pago(s) y/o puede dirigirse personalmente a los CADES o puntos de atención más cercano a su lugar de residencia; o ante cualquier inquietud, puede escribir a: Radicacion_virtual@shd.gov.co"

Con base en lo anterior, el Despacho procede a analizar si la respuesta brindada por la accionada cumple los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional para considerar satisfecho el derecho de petición.

Frente a la **notificación** de la respuesta, se tiene que ésta fue remitida al correo electrónico: brayan.martinez4851@gmail.com¹⁵ el cual coincide con el señalado por la parte actora en el acápite de notificaciones de la acción de tutela.

En cuanto a la **oportunidad** de la respuesta, se tiene que, aunque no se realizó dentro del término de 15 días hábiles indicados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado en el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, sí fue emitida y notificada al accionante durante el transcurso de esta acción de tutela.

Ahora bien, en lo que corresponde requisito relativo a resolver de **fondo** y de manera **congruente** y **completa** lo solicitado, la respuesta lo cumple por las siguientes razones:

En el único punto del derecho de petición, el accionante solicitó la actualización del pago del impuesto vehicular en los datos del Sistema de Información Tributaria. Frente a ello, la accionada le comunicó que el pago de la obligación tributaria del vehículo de placas BCD-

¹⁵ Página 11 del archivo pdf 05ContestaciónSecretariaHacienda

560, para la vigencia 2023, ya se encontraba incorporado y aplicado y, como soporte de ello, le adjuntó la consulta realizada en el Sistema de Información Tributaria, en la cual se evidencia la fecha de pago y el valor.

Así mismo, le informó que, en el Sistema de Información Tributaria, registraba un doble pago para la vigencia 2023, por valor de \$158.000 y que, por tanto, debía realizar la solicitud formal como trámite especial de Devolución y/o Compensación en los puntos dispuestos para la recepción de solicitudes.

Para finalizar, le aclaró que, en el Sistema de Información Tributaria, aparecía un saldo sin pagar para la vigencia 2022, del vehículo con placas BCD-560, por valor de \$79.000 y que, por tanto, lo invitaban a ponerse al día con el pago.

Bajo tal panorama, considera el Despacho que la respuesta brindada por la **SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ** al derecho de petición presentado por el señor **OSCAR GERARDO VELÁSQUEZ ARIAS**, cumple los requisitos que dicta la jurisprudencia constitucional, toda vez que atendió de fondo el asunto y además fue debidamente notificada.

En este punto es menester recordar, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, que el derecho fundamental de petición se satisface con una respuesta oportuna, concreta, clara y congruente, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo¹⁶.

Por lo tanto, el hecho de que la respuesta no colme el interés del peticionario, no afecta el derecho fundamental de petición, pues su núcleo esencial no se contrae a que se otorgue una respuesta que acoja los pedimentos formulados, sino a que se otorgue una respuesta que resuelva de fondo el asunto. Si la respuesta no accede a las peticiones, es un asunto ajeno a la acción de tutela que deberá resolverse a través de los mecanismos ordinarios.

En consecuencia, lo que era objeto de vulneración del derecho fundamental de petición fue superado, y, por lo tanto, pierde efecto la acción de tutela, por lo que deberá declararse el **hecho superado**.

En virtud de lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

¹⁶ Sentencia T-077 de 2018, T-487 de 2017, T-455 de 2014, entre otras.

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la ausencia actual de objeto por **HECHO SUPERADO** en la acción de tutela de **OSCAR GERARDO VELÁSQUEZ ARIAS** en contra de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ**, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más eficaz y expedito, advirtiéndoles que cuentan con el término de tres (3) días hábiles para impugnar esta providencia, contados a partir del día siguiente de su notificación.

La impugnación deberá ser remitida al email: j08lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

TERCERO: En caso de que la sentencia no sea impugnada, por Secretaría remítase el expediente a la Corte Constitucional para que surta el trámite eventual de revisión. Una vez sea devuelta de la Corte Constitucional, tras haber sido excluida de revisión, archívese.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


DIANA FERNANDA ERASSO FUERTES
JUEZ